



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-019-2019-00098-01 (O2-22-414)  
**Accionante:** JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ  
**Accionada:** CEMENTOS ARGOS S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 082  
**Asunto:** RETROACTIVO PENSIONAL – SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

En Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-019-2019-00098-01 (O2-22-414), instaurado por JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ, representado por su curadora MARÍA ESNEDA MARÍN GONZÁLEZ, en contra de CEMENTOS ARGOS S.A., con el fin de resolver los recursos de apelación que fueran propuestos por el señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ y la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 03 de noviembre de 2022 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **1. ANTECEDENTES**

La señora MARÍA ESNEDA MARÍN GONZÁLEZ quien representa los intereses de su hermano interdicto, señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ y actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., en

procura de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional de la prestación económica de sobrevivientes que actualmente percibe, el que se causó entre el 2 de enero de 2013 y el mes de septiembre de 2019, junto con los intereses moratorios previstos el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones señaló que su padre, el señor Orlando Marín Pérez, fue pensionado por la sociedad Industrial Hullera, quedando la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. a cargo del pago de la misma, y que el mencionado señor Marín Pérez falleció el pasado 02 de enero de 2013 por causas de origen común.

Estimó como fundamento del retroactivo pensional al que aspira, la continua dependencia económica de su padre hasta el momento de su deceso y por cuenta de su discapacidad, resaltando que, la JRCIA mediante dictamen del 13 de mayo de 2015 le otorgó una PCL igual al 62,55%, tomando la fecha de su nacimiento como hito de estructuración del estado de invalidez. Informó que a mediados de 2015, ante la muerte de su padre y el resultado de la valoración médica antes mencionada, solicitó ante la accionada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, CEMENTOS ARGOS S.A., supeditó el disfrute de la prestación *“...al nombramiento de un curador o tutor, dado lo que se estimó por parte de dicha entidad, la incapacidad jurídica del señor MARIN(sic) GONZALEZ(sic) para la administración de la mentada prestación económica, ante las patologías descritas en el dictamen de PCL que acreditaba su condición de hijo inválido del causante”*.

Sostuvo que en el año 2016 se promovió la acción ordinaria para obtener la declaratoria de la interdicción judicial, trámite que le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Caldas – Antioquia y que finalizó con sentencia del 30 de mayo de 2018, donde se declaró *“...su interdicción judicial definitiva, designando como su curadora legítima a su hermana, la señora MARIA ESNEIDA MARIN(sic) GONZALEZ(sic) C.C. 43.710.793, quien finalmente tomó posesión del cargo el 20 de septiembre de 2018”*. Luego aseveró que, contando con la decisión judicial de interdicción, solicitó el reconocimiento del derecho pensional ante la convocada, sociedad que procedió a su reconocimiento, pero solo a partir del mes de septiembre de 2019, descartando con ello el pago de las mesadas causadas desde la muerte de su padre y hasta la fecha de la inclusión en nómina.

Finalmente, considera que tiene asidero suficiente sus pedimentos, atendiendo lo preceptuado en el artículo 2530 del CC, modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002, que reglamenta la suspensión de la prescripción extintiva a favor de los incapaces.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 22 de marzo de 2022 (doc.03, carp.01), y se notificó a la demandada el día 12 de ese mismo mes y año (docs.05 y 06, carp.01). La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. al momento de dar respuesta al escrito incoativo planteó oposición a la prosperidad de los pedimentos, aceptando como ciertos los hechos que hacen referencia a la solicitud de reconocimiento pensional que fuera elevada. Frente a los restantes, dijo no ser ciertos o no constarle su veracidad. En su defensa propuso las excepciones de mérito que postuló como prescripción, caducidad de la acción, buena fe e inexistencia de la obligación (doc.07, carp.01).

## 1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 03 de noviembre de 2022 (docs.12, 13 y 14, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió “...CONDENAR a CEMENTOS ARGOS S.A a reconocer y pagar al Sr. JHON(sic) FREDY MARIN(sic) GONZALEZ(sic) identificado con CC 98.603.860 y representando(sic) por la Sra. MARIA ESNEDA MARIN(sic) GONZALEZ(sic) identificada con CC 43.710.793 como su curadora, la suma de \$44.191.468 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 30 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2019...”, junto con la indexación.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de tener por probado la relación filial entre el promotor y el señor Orlando de Jesús Marín Pérez, así como la muerte de este último, razonó que de la interpretación de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, en consonancia con lo previsto por el artículo 2530 del CC, el fenómeno de la prescripción aplicó sobre todas las mesadas pensionales que se causaron con anterioridad al 30 de agosto de 2015, en razón a que la suspensión de esta figura solo operó con la declaratoria de interdicción del actor el pasado 30 de agosto de 2018 con la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Caldas - Antioquia.

De los intereses moratorios adujo que los mismos no son procedentes, pues de una parte el derecho pensional primigenio fue reconocido en época anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y de otra, no se probó el origen o la naturaleza de esta pensión, reconociendo por ello la indexación de las mesadas pensionales cuyo reconocimiento dispuso (minuto 44:28 a 01:26:26, doc.14, carp.01).

## 1.3. Recurso de Apelación

La poderhabiente judicial del señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revoque la decisión adoptada en la

primera instancia, para en su lugar, se declare no probada la excepción de prescripción y se concedan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Con tal propósito afirmó que, al ser el accionante una persona interdicta operaba a su favor la suspensión del término prescriptivo, enfatizando que el razonamiento vertido en la sentencia de primera instancia no se ajusta a la doctrina decantada por la Corte Suprema de Justicia.

Acotó que la suspensión de los efectos de la prescripción tuvo vigencia hasta la fecha en que fue proferida la sentencia que declaró la interdicción de su prohijado, y como quiera que la curadora designada reclamó dentro de los tres años siguientes a ese hito, se interrumpió el término trienal y con ello no se extinguieron las mesadas pensionales causadas desde el óbito del señor Marín Pérez.

Añadió que, de acuerdo con el nuevo criterio de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, los intereses moratorios reglados por la Ley 100 de 1993 aplica a todos los pensionados, sin distinguir si el derecho pensional se encuentra regido o no por la mencionada Ley 100 de 1993, reiterando su reclamación (minuto 01:26:41 a 01:35:05, doc.14, carp.01).

A su turno, la parte demandada critica lo resuelto por el *a quo*, planteando que el artículo 2530 del CC no aplica en materia de derechos laborales y de la seguridad social, pues lo cierto es que, esa disposición reglamenta la prescripción adquisitiva, sosteniendo que la prescripción como medio para extinguir obligaciones está ubicada en un capítulo distinto, concluyendo así la indebida aplicación de la suspensión de la prescripción al caso bajo estudio, transcribiendo en apoyo de la tesis de la censura, sendos apartes de una decisión del Consejo de Estado (minuto 01:35:10 a 01:39:58, doc.14, carp.01).

#### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

Los recursos de apelación se admitieron el 08 de noviembre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 15 de ese mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El procurador judicial de CEMENTOS ARGOS S.A. (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se revoque la sentencia criticada, pues considera que “...[e]l operador jurídico al momento de declarar la prescripción realizó una indebida aplicación de las disposiciones normativas, es así como fundamentó su decisión en lo reglado en el art. 2530 del C.C. (Que regula la figura de la suspensión de la prescripción adquisitiva a favor de incapaces). Disposición normativa que no se ajusta a los presupuestos del caso concreto. La

*figura de la prescripción en materia laboral tiene norma expresa por lo que no es de recibo aplicar normas de otros compendios normativos al caso que nos ocupa. Los artículos 488 y 489 del CST, y el art. 151 del CPTSS. Consagran la figura de la prescripción de las acciones y los derechos en materia laboral y procesal laboral. Prescripción que tiene naturaleza extintiva”; concluyendo que son las disposiciones del derecho social las únicas que desarrollan la prescripción en los conflictos de esta naturaleza, por lo que “...el actor contaba tres años a partir de la interrupción de la prescripción para presentar la acción judicial tendiente a obtener la prestación económica por la muerte y su eventual retroactivo, es decir, hasta el 2015. No obstante, la demanda sólo representa en el año 2022, siendo está la fecha que se debe tener como base para contra los termino prescriptivos. Careciendo de fundamento los extremos temporales en los cuales el A quo reconoció el derecho la retroactivo”.*

De igual manera, comparte los razonamientos del juez singular para negar los intereses moratorios, en la medida en que los mismos solo pueden ser impuestos “...a cargo de las entidades del sistema de seguridad social que incumplen con le(sic) pago de la mesada pensional de origen legal y cuya fuente normativa haya sido la Ley 110(sic) de 1993 o las disposiciones que la completaron o modificaron”. La parte demandante dentro del término legal de traslado, guardó silencio.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ y el ente societario CEMENTOS ARGOS S.A., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si los efectos de la prescripción se extendieron a las mesadas pensionales que reclama el pretensor y que fueran causadas entre el 02 de enero de 2013 y el 29 de mayo de 2015; efecto para el que se exhibe necesario explicar el contenido y alcance de la suspensión de la prescripción extintiva a favor de los incapaces, de cara a las disposiciones legales y jurisprudenciales regulativas de este fenómeno jurídico, puntualmente los artículos 2530 y 2541 del CC, junto con las sentencias SL10641 de 2014, SL1020 de 2021 y SL1613 de 2022 proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la Corporación se ocupará en determinar si resulta procedente dispensar en favor del actor los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

## 2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en lo que incumbe a la improcedencia de los intereses moratorios reclamados por el suplicante, **revocándolo** en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de prescripción liberatoria propuesta por la sociedad demandada, con arreglo a los planteamientos que pasan a exponerse:

## 2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor Orlando de Jesús Marín Pérez falleció el 02 de enero del 2013 (pág.19 y 20, doc.02); que el señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ nació el 28 de febrero de 1984 (págs.17 y 18, doc.02, carp.01); que la JRCIA determinó el estado de invalidez del señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ con una PCL del 62,55% y el 28 de febrero de 1994 como data en que se estructuró dicho estado (págs.21 a 30, doc.02, carp.01); que el 30 de mayo de 2018 el Juzgado Civil del Circuito de Caldas – Antioquia, declaró en interdicción judicial definitiva a JOHN FREDY MARÍN GONZÁÑLEZ y designó como su curadora legítima a la señora MARÍA ESNEDA MARÍN GONZÁLEZ (págs.32 a 35, doc.02, carp.01).

Adicionalmente no se cuestiona que el señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ es beneficiario de la pensión de sobrevivientes con ocasión al deceso de su padre Orlando de

Jesús Marín Pérez y a cargo de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., así tampoco, que esta última pagó la pensión de sobrevivientes a partir del 1 de septiembre de 2019 (págs.42 a 44, doc.02, carp.01).

### 2.3.1 De la Prescripción

Al efecto, debe precisar la Sala que, de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia<sup>1</sup>, *[l]a prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, o bien, de extinguir las acciones y derechos, por haberse poseído dichas cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo determinado. Es decir, la prescripción extintiva se entiende como una forma de extinción o desaparición de un derecho, real o personal o de una acción, cuando durante un determinado período de tiempo establecido en la ley, no se realizan ciertos actos, a lo que el ordenamiento le atribuye la consecuencia indicada (CSJ SL2501-2018).*

Ahora, importa señalar que, en cuestiones de índole laboral y de la seguridad social, la normativa legal aplicable a esta figura jurídica corresponde a los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS, preceptos conforme a los cuales, las acciones derivadas de las leyes sociales prescriben en un término igual a 3 años, contados a partir del momento en que el derecho se hizo exigible; mientras que su interrupción está marcada por el simple reclamo escrito del trabajador o beneficiario presentado ante el empleador u obligado.

Llevada la controversia a este aspecto, se impone memorar que, para el caso de sujetos que merecen una protección especial, la ley dispuso suspender los efectos extintivos de la prescripción mientras subsistan las causas que impidan materialmente a estas personas, acudir de manera directa a la jurisdicción en procura del reconocimiento de sus derechos fundamentales, tal es el caso de los menores de edad, los incapaces, los sordomudos, entre otros. En esta dirección el artículo 2530 del CC enseña que **“[l]a prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos. No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista”**. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

---

<sup>1</sup> Sentencia SL1613 de 2022

Aquí la Corporación recuerda, como en innumerables oportunidades la Corte Suprema de Justicia, en tratándose del contenido y alcance de la norma antes trasunta ha asentado que:

*La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó en sentencia del 6 de septiembre de 1996, expediente 7565, que se adoptó por mayoría.*

*La ley laboral establece una prescripción que frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, **esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, o cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda.***

*En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella disposición, incluye a **"Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría"**.*

*Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que **el modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado.*** -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Establecido este punto, subraya la Sala que, en el *sub lite* el derecho a la pensión de sobrevivientes que actualmente detenta el actor, se causó e hizo exigible a partir del 02 de enero de 2013, data en la cual falleció su padre, el señor Orlando de Jesús Marín Pérez. Así también, cumple destacar que la JRCIA (págs.21 a 30, doc.02, carp.01) determinó que el pretensor padece de las patologías de síndrome compulsivo crónico (secundaria a meningitis en la infancia), retardo mental homologado a retardo del desarrollo e hipoacusia neurosensorial bilateral; diagnósticos que le representaron una PCL igual al 62,55%. Del mismo modo, la junta calificadora fijó como hito de la estructuración del estado de invalidez, el 28 de febrero de 1984, fecha de nacimiento del actor. De manera similar, se tiene que el Juzgado Civil del Circuito de Caldas – Antioquia en providencia del 30 de mayo de 2018, **declaró en interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta al señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ,**



sentenciando que el mencionado señor MARÍN GONZÁLEZ no tiene la libre disposición de sus bienes (págs.32 a 35, doc.02, carp.01).

En tal contexto y del análisis conjunto de los elementos de prueba descritos, se muestra traslúcido que, ciertamente el suplicante, señor JOHN FREY MARÍN GONZÁLEZ es beneficiario de la protección contemplada en el artículo 2530 del CC por motivo de su estado de salud y las enfermedades que padece, puntualmente el retardo mental y el síndrome compulsivo crónico, que desde su nacimiento le impide discernir adecuadamente o tomar decisiones inmediatas sobre una situación personal o patrimonial, pues no de otra forma se explica las resultas del dictamen de PCL emitido por la JRCIA y lo resuelto en sede judicial dentro de la acción ordinaria para obtener la declaratoria de interdicción.

Lo expuesto, deviene útil para descubrir el desacierto en el ejercicio de juzgamiento del *a quo*, en tanto consideró que la suspensión de los efectos de la prescripción operó solo a partir de la decisión adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas – Antioquia, contradiciendo la lógica de la sana crítica en la valoración probatoria, en tanto no apreció en su correcta dimensión el estado de salud del accionante, el cual es claro en cuanto a las deficiencias que padece desde su nacimiento y primera infancia que no le permitieron acudir de manera directa, ni antes ni después de la declaratoria de la interdicción judicial, a los estrados judiciales en procura de obtener el reconocimiento pensional echado de menos, y siendo ello así, el actor se encuentra bajo la protección antes aludida en el artículo 2530 del CC, por lo que para el mismo no corrió el término extintivo de la prescripción.

Esta conclusión se muestra consistente al revisar la valoración técnica desplegada por la JRCIA que coligió: “[p]aciente con hipoacusia neurosensorial bilateral severa-profunda. Se puede intentar con audífonos y en caso de no ser útiles necesitaría un implante coclear. **En este momento con la audición que presenta el paciente no se puede comunicar con el medio.** (...) [p]aciente que solicita sustitución pensional **por presentar epilepsia con convulsiones tipo tónico clónicas secundaria a meningitis en la infancia, refiere última crisis hace 15 días,** actualmente sin control con neurólogo, hipoacusia bilateral en todas las frecuencia(sic), pendiente de adaptación de audífonos o implante coclear, **se observa alteración cognitiva por depravación, orientado en las tres esferas con manejo básico del reloj y el dinero y escritura básica, mas no en la lectoescritura. Independiente en la ABC y AVD no sale solo a la calle,** relaciones sociales disminuidas, **inactivo económicamente, al parecer no ha desempeñado ningún rol laboral durante su vida adulta**”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Por otro lado, con mayor incidencia en la desestimación del ataque formulado por la parte accionada, exalta la Sala que no se presentan razones de hecho ni de derecho, para apartarse

del precedente jurisprudencial que de manera inveterada ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en derredor a la aplicación de los artículos 2530 y 2541 del CC a los juicios de esta estirpe, tesis que bien puede ponderarse en las sentencias CSJ SL, 11 dic. 1998, rad. 11349, CSJ SL10641-2014, CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39631 y SL1983 de 2019.

Lo que viene de decirse, es suficiente para revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, declarar impróspera la excepción de prescripción que fuera propuesta por la demandada, concediendo el retroactivo pensional causado desde el 02 de enero de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2019, tomando como valor de la mesada pensional el correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente como lo sostuvo el *a quo*, y que a todas estas, no fue discutido. Así el valor que arroja el retroactivo pensional a favor del actor y a cargo de la sociedad demandada asciende a la suma de \$64.209.790, como se muestra en la liquidación que se aneja a esta sentencia.

Adicionalmente, se vislumbra que, en atención con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. está autorizada para descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los aportes para el Sistema General de Salud.

### **2.3.2. De los Intereses Moratorios**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por la aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que la causación de dichos intereses opera solo para el caso de pensiones que se encuentren concedidas integralmente bajo la égida de la Ley 100 de 1993, incluyendo las reconocidas bajo el régimen de transición pensional, no así respecto de prestaciones

pensionales que tengan un origen convencional (CSJ SL3343 de 2020, CSJ SL3635 de 2020, CSJ SL3240 de 2021, CSJ SL 2128 de 2021 y CSJ SL720 de 2023).

De acuerdo los criterios sentados sobre la materia y ante la imposibilidad de identificar el origen de la prestación pensional que disfrutaba en vida el señor Orlando de Jesús Marín Pérez y que se defirió al accionante por vía sustitución pensional, esto es, si es de naturaleza legal o convencional, no deviene en equivocada la inferencia del juez de primer grado, en el sentido de que, ante tal falencia probatoria, dispensó en lugar de los intereses de mora echados de menos, la indexación del retroactivo pensional calculado.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la revocatoria parcial de la sentencia de primer grado, en cuanto se pronunció favorablemente frente a la excepción de mérito de prescripción postulada por la demandada CEMENTOS ARGOS S.A. en los términos descritos en las líneas que antecedente y confirmándola en todo lo demás.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que la sentencia materia del recurso de alzada se revocó así sea de manera parcial, no se impondrán costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** REVOCAR parcialmente los ordinales PRIMERO y TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 03 de noviembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JHON FREDY MARÍN GONZÁLEZ, en contra de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., los cuales para todos los efectos quedarán así:

**PRIMERO:** *CONDENAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A a reconocer y pagar al señor JOHN FREDY MARÍN GONZÁLEZ y representado por la señora MARIA ESNEDA MARÍN GONZÁLEZ como su curadora, la suma de \$64.209.790 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 02 de enero del 2013 y el 31 de agosto de 2019, cifra sobre la que se autoriza descontar el valor correspondiente para sufragar los*

*aportes al Sistema General de Salud conforme se explicó en la parte motiva de esta decisión.*

**TERCERO:** *DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la accionada, particularmente la de prescripción, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.*


**SEGUNDO:** CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de alzada.

**TERCERO:** SIN COSTAS en esta instancia.

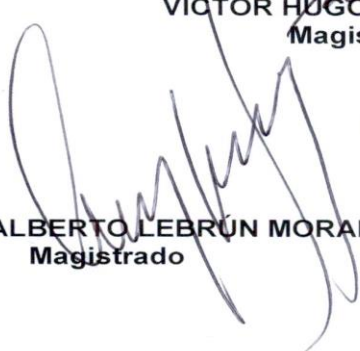
Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.


Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente

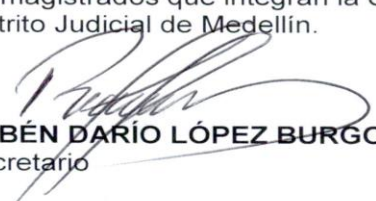


**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**  
Magistrado



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**  
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario

ANEXO 01 – LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL

AÑO	MESADAS	VALOR	TOTAL
2013	13,9	\$ 589.500,00	\$ 8.194.050,00
2014	14	\$ 616.000,00	\$ 8.624.000,00
2015	14	\$ 644.350,00	\$ 9.020.900,00
2016	14	\$ 689.455,00	\$ 9.652.370,00
2017	14	\$ 737.717,00	\$ 10.328.038,00
2018	14	\$ 781.242,00	\$ 10.937.388,00
2019	9	\$ 828.116,00	\$ 7.453.044,00
TOTAL			\$ 64.209.790,00